

La democracia inhospitalaria en 2018

Patricio Rubio Ortiz

Zelandia Bórquez Estrada

Las elecciones en San Luis Potosí en los últimos años han estado –como en la mayoría del país- cruzados por una competitividad creciente y han contado también con registros notables de volatilidad en el ánimo del electorado. No en vano Iván Krastev ha dicho que una de las características de las lealtades partidistas en el presente es que han dejado de parecerse a un matrimonio católico tradicional: aburrido, pero estable, para convertirse cada vez más en lo que en español podríamos denominar un “acostón” (*one night stand*, en el original). Por fortuna, el electorado potosino ha encontrado referencias partidistas para la expresión de sus preferencias y ha podido verlas reflejadas en la constitución de autoridades legítimas. Eso, bien. Sin embargo, en San Luis Potosí, también como en la mayoría del país, la existencia de elementos extraformales contamina los cauces de la competencia electoral. Veamos.

Los representantes políticos de la entidad -señaladamente, el Congreso- cobraron notoriedad nacional el año pasado en razón de lo que dio en llamarse “*La ecuación corrupta*”, un acuerdo ilegal que involucró a varios diputados con la Auditoría Superior del Estado, en una operación que tuvo por objetivo aprobar las cuentas públicas municipales por parte del Congreso, a cambio de dinero. Este caso concentró la atención de la opinión pública interesada en la política porque sintetizó el alto nivel de corrupción de la clase política (de entre muchos casos registrados, resultó el más representativo y el más agravante). Produjo la irritación y movilización de varios sectores sociales. En una palabra, profundizó la distancia entre los ciudadanos y sus gobernantes.

Junto a ello, la entidad ha padecido los registros más altos de violencia desde que se tienen mediciones. No solo del orden común, sino también de la violencia proveniente del crimen organizado. Un estado tradicionalmente pacífico, ha dejado atrás ese adjetivo para verse definido por la violencia y por la incertidumbre. En diversas regiones de San Luis Potosí, la autoridad aparece colapsada por la influencia del crimen organizado y eso ha tenido efectos concretos durante las campañas electorales. De forma cada vez más frecuente, hasta el momento de escribir estas líneas, se han registrado actos violentos en contra de candidatos y simpatizantes de diferentes partidos políticos en distintas coordenadas del estado. Hay un notorio peso de la violencia sobre las elecciones en el proceso electoral de este año. No solo respecto al número concreto de hechos delictivos que cruzan la actividad política, sino también por el efecto inhibitorio que tiene sobre otros participantes y sobre el conjunto de la sociedad potosina.

Así, en un contexto bordado por la corrupción y por la violencia política, proponemos analizar el proceso electoral 2017-2018 en San Luis Potosí (además de sus variables tradicionales de reglas institucionales; comportamiento electoral; identificación de ganadores y perdedores en las distintas órbitas del poder político; así como los efectos de la nueva distribución del poder en el conjunto del sistema político).